



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés**

#### **23-150**

Proceso:	<b>APELACIÓN SENTENCIA</b>
Demandante:	<b>JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-026-2023-00181-01</b>
Tema:	<b>Pensión vejez</b>
Decisión:	<b>REVOCA Y ABSUELVE</b>

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 39** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

#### **1.1. LO PRETENDIDO**

**Pretende** el actor que se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición y el Decreto 758 de 1990, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y/o la indexación y las costas del proceso.

## 1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO, EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que nació el 19 de noviembre de 1949 por lo que a la fecha de radicación de la demanda contaba con más de 71 años de edad.
- Que laboró al servicio del Municipio de Uramita entre el 24 de febrero de 1986 y el 31 de diciembre de 2001, pero en su historia laboral solo le aparecen cotizaciones a partir del 01 de febrero de 1996.
- Que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tenía más de 40 años de edad, por lo que es beneficiario del régimen de transición, el cual conservó con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto tenía más de 750 semanas para ese momento.
- Que solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada a través de la Resolución SUB 238441 de 2020 con el argumento que solo cuenta con 678 semanas cotizadas sin contabilizar el bono pensional con el municipio de Uramita.
- Que contra la anterior decisión interpuso los recursos de ley, pero la decisión fue confirmada a través de resoluciones SUB 267331 y DPE 16702 de 2020, argumentando que si bien tiene 1.189 semanas cotizadas teniendo en cuenta los tiempos cotizados y los laborados en el sector público sin cotización, no tenía las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990, ya que solo tiene 319 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y 678 semanas cotizadas con exclusividad al ISS, por lo que tampoco reunía las 1000 semanas.

## 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. Respecto a los hechos señaló que acepta como cierta la fecha de nacimiento del actor, que el mismo es beneficiario del régimen de transición, que este cotizó 675 semanas a febrero de 2019 y el contenido de las resoluciones expedidas por la entidad a través de las cuales se negó la pensión de vejez al demandante. Respecto a los demás hechos señaló que no le constan por lo que serán objeto de debate probatorio.

## 1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida 5 de junio de 2023, tras **DECLARAR** el demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley

100 de 1993 y que le es aplicable el Decreto 758 de 1990, **CONDENÓ** a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar al señor **JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA**:

- La pensión de vejez a partir del 2 de febrero de 2019, en cuantía de un salario mínimo, adeudándole por concepto de retroactivo la suma de **\$51.932.065**, liquidado hasta el 30 de mayo de 2023, suma de la cual autorizó realizar el descuento del aporte en salud.
- La indexación de las sumas reconocidas calculada desde que se hicieron exigibles hasta la fecha del pago efectivo.
- Y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$3.600.000.

Dentro del término concedido ambas partes interpusieron y sustentaron el recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ**

Advirtió que en el caso de autos estaba acreditado que el señor JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA al 30 de junio de 1995, fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones para el sector público, se encontraba laborando para el MUNICIPIO DE URAMITA y contaba con más de 40 años de edad ya que nació el 19 de noviembre de 1949, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición, el cual conservó hasta el año 2014, dado que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 contaba con más de 750 semanas cotizadas. Agregó que conforme al precedente de la Corte Suprema de justicia a partir de la sentencia SL 1947 de 2020 es viable la sumatoria de tiempos públicos y privados para las pensiones del régimen de transición en aplicación del Decreto 758 de 1990, siempre y cuando ese tiempo público no haya servido para financiar otra prestación de la misma naturaleza. Por consiguiente estimó que como el demandante cumplió 60 años de edad y sumando los tiempos laborados en el sector público y los cotizados al ISS, para diciembre de 2014 tenía 1.001 semanas cotizadas, acreditando los requisitos del Decreto 758 de 1990, por lo que condenó a COLPENSIONES a reconocer la pensión de vejez a partir del 2 de febrero de 2019, día siguiente al retiro del sistema, dado que ninguna semana se vio afectada de prescripción.

De otro lado consideró que no eran procedentes los intereses moratorios, dado que cuando la entidad negó la pensión al actor, aún no había variado la postura jurisprudencial que permitió la sumatoria de tiempos públicos y privados, por lo que en su lugar reconoció la indexación de las mesadas adeudadas para compensar la pérdida del valor adquisitivo por el transcurso del tiempo.

## **2.2.RECURSO DE APELACIÓN**

### **2.2.1. APELACIÓN DEMANDANTE**

Señaló que se deben reconocer los intereses moratorios, toda vez que si bien el cambio jurisprudencial que permite la sumatoria de tiempos se dio a través de sentencia SL 1947 de 1º de junio de 2020, en el caso de autos el actor solicitó la prestación el 28 de julio de 2020, cuando ya había sido proferida la aludida sentencia, sin embargo la entidad negó la prestación a través de Resolución SUB 238441 del 4 de noviembre de 2020, reiterando dicha negativa en las resoluciones que resolvieron los recursos de Ley, insistiendo que no era procedente la aludida sumatoria de tiempos públicos y privados, por tanto, no es dable decir que la negativa fue justificada pues cuando se solicitó la pensión ya la Corte Suprema de Justicia había cambiado su postura, pese a que la Corte Constitucional desde el año 2009 a través de sentencias de tutela y mediante la sentencia SU-769 de 2014 ya permitía dicha sumatoria y aunado a lo anterior la entidad persistió incluso en la audiencia de conciliación en que el actor no tenía derecho a la pensión, por lo que es claro que la tardanza en el reconocimiento de la pensión ha sido injustificada y por tanto deben reconocerse intereses moratorios. Finalmente solicitó que se revisara el IBL reconocido por el despacho.

### **2.2.2. APELACIÓN COLPENSIONES**

Manifestó que la entidad negó la prestación teniendo en cuenta la totalidad de los tiempos cotizados por los empleadores públicos y privados, lo cual arrojó un total de 1.189 semanas, sin embargo pese a que el demandante es beneficiario del régimen de transición y que este le es extensivo hasta al 31 de diciembre de 2014, lo cierto es que el actor no cumple con los requisitos del Decreto 758 de 1990, pues para el 19 de noviembre de 2009 cuando alcanzó los 60 años de edad este no contaba con las 500 semanas cotizadas, dado que solo cotizó 678 semanas de forma exclusiva a Colpensiones. Agregó que si bien la sentencia SU-769 de 2014 permite la sumatoria de los tiempos no cotizados al ISS con los tiempos cotizados para el reconocimiento de la prestación, ha de tenerse en cuenta que mediante concepto jurídico BZ 2016527519 del 16 de mayo de 2016, la Gerencia Nacional de Doctrina de Colpensiones instauró los lineamientos institucionales para la aplicación de la referida sentencia SU-769 indicando que solo se aplica a quienes causen el derecho a partir de la comunicación de la aludida sentencia, pues la misma no tiene efectos retroactivos y como en el caso de autos para la fecha el actor no tenía los requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1990 no es posible el reconocimiento de la pensión.

### **2.3. ALEGATOS CONCLUSIÓN**

Únicamente presentó alegatos la parte demandante solicitando se confirmara la sentencia de primera instancia en cuanto al reconocimiento pensional, pues la misma resulta acorde con la doctrina vertida por la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 2014 y por la Corte Suprema de Justicia providencia SL1947-2020. De otro lado solicita se acceda al reconocimiento de los intereses moratorios, pues pese a que el actor es un sujeto de especial protección constitucional en virtud de su edad, Colpensiones negó la pensión apartándose, sin argumento alguno, del copioso precedente vertido por la Corte Constitucional -SU769 de 2014, T-522 de 2020, SU446-2022, con el agravante de que para el momento en que se presentó la reclamación administrativa el 28 de julio de 2020 ya se había publicado la sentencia SL1947-2020, existiendo armonía plena e indiscutible entre los diversos órganos de cierre sobre este tipo de asunto.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Conforme los argumentos planteados en el recurso de apelación, consiste en determinar si el demandante tiene derecho a la pensión de vejez de conformidad con el Decreto 758 de 1990 sumando las semanas cotizadas al ISS con el tiempo de servicio laborado en el sector público sin cotización y dependiendo de ello se analizará si hay lugar a reconocer los intereses moratorios.

Así mismo se revisarán en CONSULTA los temas que no fueron apelados y que le fueron adversos a COLPENSIONES, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015.

### **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

En primer lugar, no es objeto de discusión que en virtud de la edad el señor JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que tenía más de 40 años al 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia del régimen pensional para el sector público territorial, toda vez que para tal data, este se encontraba vinculado al MUNICIPIO DE URAMITA, según documentos visibles a folios 39 y s.s. del archivo 02 del expediente digital, lo cual le permite que para el reconocimiento de vejez se tengan en cuenta las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al cual venía afiliado.

Debe precisarse que la expresión traída por el artículo 36 ibídem “*el régimen anterior al cual se encuentren afiliados*”, ya ha sido analizada en múltiples oportunidades por la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las de radicado 52499 de 2014, y 49.148 de 2013, donde se precisó que para ser beneficiario de la transición no es necesario estar cotizando o estar adscrito a un determinado régimen a la fecha de entrada en vigencia del sistema, sino que lo esencial era que hubieran pertenecido a cualquiera de los regímenes existentes, de los cuales se les conservarían las condiciones de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto, pues al implementarse con la Ley 100 de 1993 un nuevo sistema general de seguridad social en pensiones, quiso el legislador que los trabajadores “*antiguos*”, ya fuera por edad o por tiempo de servicios, que estuvieran “*afiliados*” a un “*régimen anterior*”, no vieran frustradas abruptamente las expectativas de pensión que tenían con el sistema al cual pertenecían.

Por consiguiente, es claro que para beneficiarse de las condiciones de un determinado régimen es indispensable haber pertenecido al mismo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aunque no se hallare cotizado para la fecha de entrada en vigencia de la misma. Así lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicado 49148 de 2013, cuando dijo:

*“(…) Puestas así las cosas, bien debe concluirse que el juez de la alzada no incurrió en desafuero alguno al entender que la titularidad a un régimen pensional por vía de transición impone, como mínimo, que se haya estado afiliado al mismo durante su ordinaria vigencia, pues sólo puede accederse al derecho pensional si se cumplen los supuestos de hecho que la particular norma que lo regula exige, el primero de los cuales es, obviamente, que se hubiere tenido la condición de afiliado al mismo, ello por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo.*

*Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala al sostener que el predicamento del régimen pensional inmediatamente anterior al previsto por la Ley 100 de 1993, que exige el artículo 36 de la misma para amparar a ciertos sectores de la población trabajadora que tenían una expectativa pensional conforme a las disposiciones que en ese momento regían, y que por su vigencia fueron derogadas, solamente se puede hacer respecto de quienes hubieran tenido las condición de afiliados a los diversos regímenes pensionales que para esa época subsistían, pues, la afiliación posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, del 1º de abril de 1994, se entiende efectuada al respectivo régimen por el que se hubiere optado, es decir, al de prima media con prestación definida o al de ahorro individual con solidaridad.(…)”*

En el caso particular del señor JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA, según consta en la Resoluciones SUB 267331 y DPE 16701 de 2020 (fl 22/37) y en los certificados de bono pensional a folios 39 y s.s. del archivo 02 del expediente digital antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 había laborado al servicio del MUNICIPIO DE URAMITA, entidad del sector público que asumía directamente el pago de las pensión, sin efectuar aportes al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por lo es claro que tenía la calidad de servidor público, lo que significa que en virtud de la transición le eran aplicables las disposiciones tanto de la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, normas que regulaban la pensión de vejez en el sector público.

Ahora, pretende el demandante que en virtud del régimen de transición se reconozca su pensión de

conformidad con el Decreto 758 de 1990, normatividad dirigida a los trabajadores del sector privado que estuvieran afiliados al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Sin embargo, según se verifica en la historia laboral a folio 53/60, el señor JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA se afilió al ISS el 1º de febrero de 1996, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que significa que antes de la entrada en vigencia de dicha norma nunca perteneció al régimen pensional del aludido Decreto 758 y por tanto no tenía una expectativa legítima de pensionarse conforme al mismo, que se hubiera visto afectada con el cambio legislativo, por lo que en virtud de la transición no pueden conservarse condiciones pensionales que nunca le fueron aplicables.

Al respecto, se ha pronunciado en múltiples oportunidades la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la 49815 de 2014, la 47833 de 29 de julio de 2015, 62359 y 65719 de 2018, entre otras. Para mayor ilustración vale la pena traer a colación lo analizado por la Corte en la sentencia 57594 del 3 de octubre de 2017, en la que se dijo:

*“La discusión central del sub lite, es jurídica, y gira en torno a determinar si quienes son potencialmente beneficiarios del régimen de transición por cumplir los requisitos de edad o tiempo de servicios o número de cotizaciones previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pueden reclamar para efectos de la pensión de vejez la aplicación de una determinada normatividad precedente, no obstante que su pertenencia al régimen de pensiones se configura por primera vez con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.*

*Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala se ha pronunciado, en el sentido de señalar como resultado de la hermenéutica impartida al artículo 36 de la Ley 100 citado, que un correcto entendimiento del precepto conduce a que la aplicación de un régimen pensional precedente reclama de parte del interesado su pertenencia a él antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones, es decir, tiene que haberlo cobijado en algún momento en que ese régimen anterior tuvo vigencia, por cuanto no es dable derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo”*

En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicado 65719 de 2018, en un caso similar al de autos, indicando que:

*“(…) Superado lo anterior, en atención a la vía por la que se encauzan los cargos, no existe discusión en cuanto a que el actor se afilió al ISS el 1.º de mayo de 1996, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, supuesto fáctico que tuvo en cuenta el tribunal para negar el derecho pretendido.*

*Entonces, la controversia planteada gira en torno a determinar si el recurrente tiene derecho a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pese a que para el 1.º de abril de 1994, no se había afiliado al Sistema General de Pensiones que administraba el I.S.S.*

***Sobre el particular, la Corte ha reiterado que un adecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permite inferir que para ser beneficiario del régimen de transición, además de cumplir con la edad o el tiempo de servicios allí establecido, se requiere haber estado afiliado e***

***inscrito en un «régimen pensional anterior» que genere una expectativa legítima y que sea susceptible de protección. En el caso de autos, el demandante traía un régimen anterior, esto es, el previsto en la Ley 33 de 1985, y no el consagrado en el Acuerdo 049 de 1990, que es el que reclama. Al respecto esta Sala se pronunció en sentencia CSJ SL2129-2014, 19 feb. 2014, reiterada entre otras muchas, en la CSJ SL13154-2016, 14 sept. 2016, y más recientemente, en la CSJ SL21790-2017, 25 de oct. 2017 (...)***(negrillas fuera de texto)

Posición reiterada en sentencias SL-16200 de 2017, SL-21790 de 2017, SL-393 de 2018, SL-394 de 2018, SL-917 de 2018, SL-2380 de 2018, SL-2438 de 2018 y SL 4392 de 2020, entre otras

Línea jurisprudencial que acoge esta Sala por encontrar justificada razonadamente, al considerar que la misma guarda coherencia con el espíritu normativo de la creación de un régimen de transición, cual es la protección de las expectativas legítimas de con las que contaban los afiliados que venían cotizando bajo el régimen anterior ante el cambio legislativo.

Ahora si bien, la Sala que conoce que la Corte Constitucional en sentencias de tutela ha estimado que no es necesario acreditar tal vinculación previa, para gozar de la transición del Decreto 758 de 1990 haciendo una aplicación más amplia bajo el principio de favorabilidad, que no se compagina con la estructura o teleología que conlleva la estipulación de un tránsito normativo, tal y como se analizó en sentencia SU-317 de 2021, esta Sala se aparta de dicho precedente, para seguir el de la Corte Suprema de Justicia, por las razones que a continuación se exponen:

El precedente de la Corte Constitucional que afirma que NO se exige haber estado afiliado o haber cotizado al ISS antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, como condición para aplicar de manera ultractiva los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990 se funda en los siguientes supuestos: *(i) porque no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que contenga o sustente tal exigencia; se trata en realidad de una regla sin un sustento adicional al criterio de COLPENSIONES o de algunos jueces que han omitido tener en cuenta el precedente vinculante explicado en los fundamentos jurídicos anteriores; (ii) es contraria a los principios de igualdad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y del principio de favorabilidad, pues supone un acto discrecional que impide el reconocimiento de un derecho, sin justificación alguna, y (iii) vulnera derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital y la vida, pues trunca la obtención de una mesada pensional para quienes son beneficiarios del régimen de transición y tienen derecho a pensionarse, al cumplir con los requisitos exigidos en aquel régimen que les fuere más favorable, previo al consagrado en la Ley 100 de 1993".* (SU273-2022).

En cuanto al primer supuesto de que no existe disposición *constitucional, legal o reglamentaria que contenga o sustente tal exigencia*. Sin embargo, al analizar las diferentes disposiciones, políticas, y reglamentos que determinaban las condiciones de funcionamiento del *Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por el Instituto de Seguros Sociales*



desde su creación, han establecido que el mismo es aplicable a trabajadores afiliados a dicho Instituto indicándose que no se aplica a empleados públicos.

Por ejemplo el Decreto 1650 de 1977 *"Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y se dictan otras disposiciones."*, estableció en su artículo 1º, que en dicha normativa se comprenden el régimen general de los seguros sociales obligatorios y las normas sobre organización y funcionamiento de las entidades que los administran, advirtiendo que los seguros sociales obligatorios del personal de la Defensa y de los servidores públicos en general, se rigen por disposiciones especiales<sup>1</sup>, desmarcando desde un comienzo de este régimen el aplicable a empleados oficiales y del sector defensa, que continuarían rigiéndose por la normativa especial que aplica a estos servidores. Advirtiendo además en su artículo 13 que para tener derecho a las prestaciones de dicho régimen es indispensable la afiliación al mismo:

**ARTÍCULO 13. DE LA AFILIACION AL REGIMEN. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.**

En el mismo sentido en el Decreto 3063 de 1989 *"Por el cual se adopta el Reglamento General de Registro, Inscripción, Afiliación y Adscripción a los Seguros Sociales Obligatorios del Instituto de Seguros Sociales"*, se estableció en sus artículos 4º y 5º que la afiliación era indispensable para acceder a los derechos y prestaciones que otorgaba dicho régimen, indicando que:

*"(...) Artículo 4º AFILIACION. La afiliación consiste en la aceptación por parte del Instituto de la solicitud de inscripción al régimen de los Seguros Sociales Obligatorios **y constituye la única fuente de los derechos y obligaciones que de este régimen se derivan.***

*El afiliado se identificará siempre con un código único asignado por el ISS.*

*Se entenderá afiliada una persona al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios desde la fecha de presentación personal en el ISS de la solicitud de inscripción, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales y reglamentarios establecidos para la afiliación.*

*Artículo 8º AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen **y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.*** (...) (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Surge de lo expuesto que, los derechos y obligaciones contemplados en el *Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios de Invalidez, Vejez y Muerte* que administraba el entonces **Instituto de Seguros Sociales** se extendían exclusivamente a los afiliados a dicho régimen, lo que requería su inscripción y afiliación al mismo, **"única fuente de los derechos y obligaciones que de este régimen se derivan.**

---

<sup>1</sup> Decreto 1650 de 1977 (julio 18). **ARTICULO 1o. DEL CAMPO DE APLICACION.** El presente Decreto establece el régimen general de los seguros sociales obligatorios y las normas sobre organización y funcionamiento de las entidades que los administran. Sin embargo, los seguros sociales obligatorios del personal del ramo de la Defensa, y, en general, los de los servidores públicos se rigen por disposiciones especiales.

Respecto al segundo aspecto considerado por la Corte Constitucional para considerar la posibilidad de reconocer el *Régimen del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte* sin hacer miramiento en cuanto que se tuviera la condición de afiliado al ISS antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 radica en que tal exigencia *“(ii) es contraria a los principios de igualdad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y del principio de favorabilidad, pues supone un acto discrecional que impide el reconocimiento de un derecho, sin justificación alguna”*, pues considera la Corte que no existía una exigencia de que se tuviera que acreditar una afiliación al régimen de IVM del ISS, para acceder a las prestaciones de ese reglamento, pero conforme se analizó, la afiliación al ISS sí era una condición establecida en la reglamentación que disponía el funcionamiento y prestaciones a cargo de ese régimen, por lo que dicha interpretación no comporta un análisis injustificado.

Y por último reseña la Corte Constitucional que se *“(iii) vulnera derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital y la vida, pues trunca la obtención de una mesada pensional para quienes son beneficiarios del régimen de transición y tienen derecho a pensionarse, al cumplir con los requisitos exigidos en aquel régimen que les fuere más favorable, previo al consagrado en la Ley 100 de 1993”*. Frente a este punto si bien el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) y demás normas que le precedieron, no imponían en sus requisitos que se tuviera que acreditar afiliación al ISS para tener derecho a la prestaciones de ese régimen, lo que tal como hubo de explicarse, esta es una condición que se desprende del conjunto de normas que componen el Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios de Invalidez, Vejez y Muerte, que reglan todos los aspectos relativos al mismo, que expresamente imponen la afiliación al ISS como condición para tenerse como beneficiario de las prestaciones de seguridad social estatuidas en el citado régimen.

Conforme lo analizado, contrario a lo estimado por el a quo, concluye la Sala que el señor JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA, no tiene derecho a que su pensión se reconozca conforme al Decreto 758 de 1990, pues dicha norma nunca le fue aplicable, toda vez que nunca realizó aportes al ISS durante la vigencia de la misma, sin que se haga necesario entonces analizar si se cumple o no con el requisito de semanas exigidas en la misma.

Ahora, es claro que el régimen anterior que se le respeta al señor JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA en virtud del régimen de transición, dada su calidad de empleado público, es el de la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988, normas que exigían como requisitos para acceder a tal prestación acreditar 55 años de edad y 20 años de servicios en el sector público, según la Ley 33, o 60 años de edad, en el caso de los hombres y 20 años de aportes entre tiempo público y privado conforme a la Ley 71 de 1988, requisitos que tampoco cumple el actor, pues si bien es cierto que para el 2019 contaba con 1.189 semanas cotizadas, no puede perderse de vista que el Acto

Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en que el mismo expiró de forma definitiva, sin que para tal data el señor JOSÉ ERNESTO CARVAJAL hubiera reunido los requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme a las citadas normas, pues no contaba con los 20 años de servicios exigidos, los que en semanas equivalen a 1.029, pues tal el actor solo había cotizado **987.32** semanas, esto teniendo en cuenta 511 semanas laboradas con el MUNICIPIO DE URAMITA sin cotización y 476.32 semanas cotizadas al ISS entre el 1 de febrero de 1996 y el 31 de diciembre de 2014, según se ve:

RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleado	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
890984575	MUNICIPIO DE URAMITA	24/02/1986	31/12/1994	\$100.320	455,29	0,00	0,00	455,29
890984575	MUNICIPIO DE URAMITA	01/01/1995	30/01/1996	\$159.480	55,71	0,00	0,00	55,71
[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:								511,00

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
890984575	MUNICIPIO DE URAMITA	01/02/1996	31/12/1996	\$159.000	47,14	0,00	0,00	47,14
890984575	MUNICIPIO DE URAMITA	01/01/1997	28/02/1997	\$191.000	8,57	0,00	0,00	8,57
890984575	MUNICIPIO DE URAMITA	01/03/1997	31/05/1997	\$172.005	12,86	0,00	0,00	12,86
890984575	MUNICIPIO URAMITA	01/06/1997	31/12/1997	\$191.000	30,00	0,00	0,00	30,00
890984575	MUNICIPIO URAMITA	01/01/1998	31/12/1998	\$226.000	51,43	0,00	0,00	51,43
890984575	MUNICIPIO URAMITA	01/01/1999	30/11/1999	\$263.000	43,29	0,00	0,00	43,29
890984575	MUNICIPIO URAMITA	01/01/2000	31/12/2000	\$286.000	51,43	0,00	0,00	51,43
890984575	MUNICIPIO URAMITA	01/01/2001	31/12/2001	\$315.000	51,43	0,00	0,00	51,43
811040692	PRESTASUR	01/02/2004	31/03/2004	\$358.000	8,57	0,00	0,00	8,57
71618359	LUIS EDUARDO GIL CAN	01/07/2009	31/07/2009	\$199.000	1,71	0,00	0,00	1,71
71618359	LUIS EDUARDO GIL CAN	01/08/2009	30/09/2009	\$498.000	8,57	0,00	0,00	8,57
71618359	LUIS EDUARDO GIL CAN	01/10/2009	31/10/2009	\$17.000	0,14	0,00	0,14	0,00
71712286	BALLESTEROS VILLADA	01/10/2009	31/10/2009	\$33.127	0,29	0,00	0,00	0,29
71712286	BALLESTEROS VILLADA	01/11/2009	30/11/2009	\$497.000	4,29	0,00	0,00	4,29
71618359	LUIS EDUARDO GIL CAN	01/12/2009	31/12/2009	\$133.000	1,14	0,00	0,00	1,14
71712286	BALLESTEROS VILLADA	01/12/2009	31/12/2009	\$496.900	0,00	0,00	0,00	0,00
71618359	LUIS EDUARDO GIL CAN	01/01/2010	28/02/2010	\$515.000	8,57	0,00	0,00	8,57
71618359	GIL CANO LUIS EDUARD	01/04/2010	30/04/2010	\$292.000	2,43	0,00	0,00	2,43
900456698	CONSORCIO SANTA ELEN	01/10/2011	31/10/2011	\$18.000	0,14	0,00	0,00	0,14
98477098	FRANCISCO JAVIER ALV	01/01/2012	31/01/2012	\$340.000	2,57	0,00	0,00	2,57
98477098	FRANCISCO JAVIER ALV	01/02/2012	31/12/2012	\$567.000	47,14	0,00	0,00	47,14
98477098	FRANCISCO JAVIER ALV	01/01/2013	31/01/2013	\$589.500	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO JAVIER ALV	01/03/2013	31/03/2013	\$177.000	1,29	0,00	0,00	1,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/04/2013	31/05/2013	\$589.500	8,57	0,00	0,00	8,57
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/06/2013	31/07/2013	\$589.000	8,57	0,00	0,00	8,57
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/08/2013	31/08/2013	\$722.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/09/2013	30/09/2013	\$679.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/10/2013	31/10/2013	\$682.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/11/2013	31/12/2013	\$589.500	8,57	0,00	0,00	8,57
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/01/2014	30/06/2014	\$616.000	25,71	0,00	0,00	25,71
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/07/2014	31/07/2014	\$779.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/08/2014	31/08/2014	\$941.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/09/2014	30/09/2014	\$775.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/10/2014	31/10/2014	\$631.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/11/2014	30/11/2014	\$743.000	4,29	0,00	0,00	4,29
98477098	FRANCISCO J ALVAREZ	01/12/2014	31/12/2014	\$599.000	3,43	0,00	0,00	3,43

Por tanto, es claro que el señor CARVAJAL CORREA no alcanzó a reunir las semanas exigidas por la Ley 71 de 1988, norma que le era aplicable en virtud del régimen de transición antes del 31 de diciembre de 2014, cuando expiró la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que tampoco es posible reconocer la prestación conforme a tal norma y menos aun aplicando la Ley 100 de 1993 con

la modificación de la Ley 797 de 2003, dado que el actor cuenta en la actualidad con 1.189 semanas cotizadas al año 2019, fecha para la cual el mínimo exigido era de 1.300 semanas.

En consecuencia, se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia y en su lugar se ABSOLVERÁ a COLPENSIONES de todas las pretensiones en su contra.

Costas en ambas instancias a cargo del demandante. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$50.000.

**4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

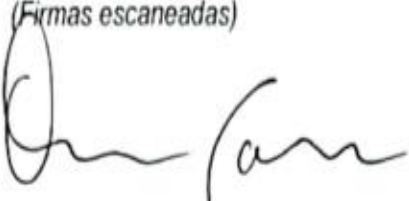
**DECIDE**

**PRIMERO: REVOCA** la sentencia proferida el 5 de junio de 2023 por el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Medellín y en su lugar **ABSUELVE** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor **JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA** identificada con c.c. 8.411.405 contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$50.000.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

  
MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

  
MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **JOSÉ ERNESTO CARVAJAL CARTAGENA**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No.: **05001-31-05-026-2023-00181-01**  
Decisión: **REVOCA Y ABSUELVE**  
Fecha de la sentencia: **24/11/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **27/11/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario